



Dirección General de Infancia,
Familia y Fomento de la Natalidad
CONSEJERÍA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

ORDEN

NÚMERO 1064/2022

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

Expte.: 023/2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes

En virtud de lo que establece el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

DISPONGO

Acordar el inicio y tramitación del expediente correspondiente al contrato de servicios denominado **“DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LOS CENTROS BASES DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD” CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU**, a propuesta de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, cuya adjudicación se efectuará mediante tramitación ordinaria por procedimiento abierto y pluralidad de criterios, al amparo de lo previsto en los artículos 131 y 146.2 de la mencionada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, justificando su necesidad en los siguientes motivos:

El Decreto 208/2021, de 1 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, atribuye en su artículo 15 las siguientes competencias a la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad:

1. El reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

2. La emisión de dictámenes e informes necesarios para la tramitación de prestaciones y la prestación de servicios especializados de atención básica en materia de información, orientación e intervención terapéutica.

Los procedimientos anteriormente expuestos, a tenor del Real Decreto 1979/1999, de 23 de diciembre, sobre el procedimiento para el reconocimiento y valoración de la discapacidad, se regulan supletoriamente por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a la que deben adecuarse en lo que se refiere a la tramitación del expediente administrativo.

No obstante, esta última ley, exige y recoge una serie de consideraciones y de obligaciones para garantizar la implantación del expediente administrativo electrónico, que se está llevando a cabo de forma paulatina.

El sistema informático “Reconocimiento Grado de Discapacidad” RGM, implementado por el Ente Público de Derecho, Agencia Madrileña para la Administración Digital alberga los expedientes de valoración de la discapacidad de todos los usuarios de la Comunidad de Madrid.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1240995047286350521126**

Progresivamente, este aplicativo ha ido incluyendo las exigencias que, a través de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico y las leyes que le sucedieron, fueron estableciendo. En la actualidad, es expresa la obligación de las Administraciones de tramitar electrónicamente los expedientes de los ciudadanos, según establece la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común. No obstante, para poder hacer realidad el expediente administrativo electrónico en su integridad, 100% en formato digital, resulta imprescindible proceder a la digitalización de los expedientes que total o parcialmente, contienen el formato papel.

La labor de digitalización y copia auténtica, en la que no sólo se procede al escaneo de la documentación, sino a la elaboración de una copia auténtica, en los términos que establece el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común queda de manifiesto que se tratan de servicios a prestar por Entidades Acreditadas y autorizadas para poder verificar el cumplimiento de la normativa relativa a la obtención de las copias en formato digital.

Por su parte, en el Consejo Europeo de 21 de julio de 2020, se aprobó la puesta en marcha del Instrumento Europeo de Recuperación, en cuyo desarrollo el Parlamento y el Consejo dictaron el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y el Estado hizo lo propio con el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En el caso de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, los proyectos se enmarcan dentro de la Política Palanca 8 (PP8), Componente 22: "Plan de choque para la economía de los Cuidados y Refuerzo de las políticas e Igualdad e Inclusión". Dentro de este C22, este contrato se encuentra dentro de la Inversión 2, Proyecto 3 "Digitalización de Historia Social única", denominado Digitalización de los expedientes administrativos de los centros bases de discapacidad.

Por todo ello, resulta imprescindible la tramitación de este expediente de contratación para cumplir un mandato legal para el que se ha concedido financiación europea por su potencial transformador del sistema de protección.



Fecha	LA CONSEJERA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL (P.D. Orden 1558/2021, de 28 de septiembre, BOCM nº 239, de 07/10/2021) EL DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
10 de mayo de 2022	